



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/45/664
31 de octubre de 1990
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo quinto período de sesiones
Tema 12 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Situación de los derechos humanos en el Afganistán

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de presentar a los miembros de la Asamblea General el informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán preparado por el Sr. Félix Ermacora, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 1990/53 de la Comisión, de 6 de marzo de 1990, y con la decisión 1990/234 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1990.

INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 15	2
II. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN	16 - 105	4
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	106 - 132	22

Anexos

I. INFORMACION PARA LOS REFUGIADOS AFGANOS EN BELUCHISTAN	27
II. INFORMACION PUBLICADA POR LOS COMANDANTES DE LOS MUYAHIDIN ISLAMICOS	29

I. INTRODUCCION

1. En 1984 la Comisión de Derechos Humanos encomendó por vez primera al Relator Especial que estudiara la situación de los derechos humanos en el Afganistán. Posteriormente, en diversas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social se ha renovado periódicamente su mandato, y se le ha pedido que presente informes a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea General. Hasta el momento, el Relator Especial ha presentado seis informes a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1985/21, E/CN.4/1986/2, E/CN.4/1987/22, E/CN.4/1988/25, E/CN.4/1989/24 y E/CN.4/1990/25) y cinco informes a la Asamblea General (A/40/843, A/41/778, A/42/667 y' Corr.1, A/43/742 y A/44/669).
2. En su cuadragésimo sexto período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos decidió en su resolución 1990/53 prorrogar por un año el mandato del Relator Especial, prórroga que fue confirmada por el Consejo Económico y Social en su decisión 1990/234.
3. En su cuadragésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, tras examinar el informe presentado por el Relator Especial, aprobó la resolución 44/161, de 15 de diciembre de 1989, en la que decidía mantener en examen, en su cuadragésimo quinto período de sesiones, la situación de los derechos humanos en el Afganistán, a fin de volver a examinar esa cuestión a la luz de los elementos adicionales que aportaran la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social.
4. Así pues, el Relator Especial tiene el honor de presentar su informe a la Asamblea General en cumplimiento de la resolución 1990/53 de la Comisión de Derechos Humanos y de la resolución 44/161 de la Asamblea General.
5. A raíz de la renovación de su mandato en el cuadragésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y de conformidad con la práctica anterior, el Relator Especial visitó de nuevo la región con el fin de obtener la información más amplia posible. Su visita al Pakistán tuvo lugar del 13 al 22 de septiembre y al Afganistán del 22 al 27 de septiembre de 1990. Cabe señalar que esta es la primera vez que el Relator Especial ha podido visitar las regiones del Afganistán no controlada por el Gobierno, es decir, en las provincias de Kunar y Kandahar.
6. Durante su visita al Pakistán y de acuerdo con un programa establecido, el Relator Especial fue recibido por los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Comisionado Jefe para los Refugiados Afganos.
7. En la provincia de la Frontera del Noroeste, el Relator Especial se entrevistó con el Comisionado Regional para los Refugiados Afganos y visitó el poblado de refugiados de Shamshattoo, donde conversó con los refugiados de diferentes zonas del Afganistán. Visitó también el campamento de capacitación en limpieza de minas de Risalpur. Efectuó también una visita al Hospital Quirúrgico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Heridos de Guerra y el Centro Siquiátrico para Afganos, y celebró conversaciones con representantes de diversas organizaciones humanitarias con base en Peshawar.

8. En Peshawar el Relator Especial se entrevistó con el Profesor B. Rabbani y el General Jal, en representación del llamado Gobierno Provisional de la República Islámica del Afganistán (Alianza de los Muyahidíes), con quien cambió impresiones sobre la situación general del país.

9. En la provincia de Beluchistán, el Relator Especial se entrevistó con el Comisionado Regional para los Refugiados Afganos y visitó el Hospital Al-Salam Saudi y el Hospital Quirúrgico del CICR para heridos de guerra.

10. Durante su visita al Afganistán, de conformidad con un programa establecido en consulta con las autoridades afganas, el Relator Especial fue recibido por el Presidente del Afganistán, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia, el Ministro para la Seguridad del Estado, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro para los Asuntos de los Repatriados y el Ministro de Enseñanza Superior y Profesional. Se entrevistó también con representantes de la Comisión encargada de desactivar minas, el Consejo Supremo de Ulewas del Afganistán, el Frente de Salvación Nacional y la Asociación de Abogados del Afganistán.

11. En Kabul, el Relator Especial visitó la cárcel de Pol-i-Charki y la Academia Médica Militar "400 camas". Visitó también el Hospital Indira Gandhi y el Hospital Quirúrgico del CICR para heridos de guerra y se entrevistó con representantes de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja. En la provincia de Balkh, visitó Mazar-i-Sharif y se entrevistó con representantes de la administración local, incluido el Gobernador. El Relator Especial visitó también el aeropuerto Herat donde observó el transporte aéreo de refugiados y entrevistó a las personas que regresaban.

12. El Relator Especial tuvo ocasión de visitar por primera vez las siguientes regiones del Afganistán que no estaban controladas por el Gobierno: el distrito de Asadabad en la provincia Kunar y el distrito de Arghestán en la provincia de Kandahar.

13. En el curso de sus visitas, el Relator Especial contó con la completa colaboración de las autoridades del Afganistán y del Pakistán, que hicieron todo lo posible para que el programa de visitas correspondiera en todos sus detalles a los deseos que había manifestado. El Relator Especial agradeció sobre todo la posibilidad que tuvo de visitar las regiones no controladas por el Gobierno en las provincias de Kunar y Kandahar en el Afganistán. A este respecto, desea una vez más agradecer a la Oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas en relación con el Afganistán su asistencia logística sumamente eficiente, sin la cual esas visitas no se podrían haber efectuado.

14. Para redactar el presente informe, que es el sexto informe que presenta a la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, además de reunir información durante las visitas al Pakistán y al Afganistán, el Relator Especial siguió el curso de los acontecimientos durante el período que abarca el informe y evaluó sistemáticamente la información escrita y oral relacionada con el objeto de su mandato que recibió de distintas personas y organizaciones.

15. Consciente de que la situación en el Afganistán está evolucionando, el Relator Especial describe en el capítulo II la situación de los derechos humanos en el contexto político general, analiza la situación de los refugiados y evalúa la situación de los derechos humanos en las zonas controladas por el Gobierno, en las zonas de combate y en las regiones no controladas por el Gobierno. El capítulo III contiene conclusiones y recomendaciones comprendidas en el ámbito de su mandato, y basadas en su análisis de la información disponible y en el examen de las medidas que se podrían tomar.

II. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN

A. Generalidades

16. Durante casi diez años ha habido en el Afganistán un conflicto de grandes proporciones, que ha tenido consecuencias que todavía son visibles en todo el país: destrucción de poblados, aldeas y propiedades, devastación de la economía, innumerables muertes, desapariciones, prisioneros cuya suerte se desconoce, y personas con heridas que requieren la amputación. El país atraviesa una situación en la que los derechos humanos y los principios del derecho humanitario son violados hasta tal punto que cualquier observador se sentirá forzosamente afectado. Sin entrar en la cuestión de la responsabilidad por la situación de los derechos humanos en el país, parece que el interés del mundo por esta situación ha disminuido constantemente desde que se retiraron las tropas soviéticas hace año y medio y desde que los acontecimientos que se desarrollan en Europa y en el Oriente Medio han cobrado importancia primordial.

17. El objeto del presente informe es centrar la atención una vez más en los principales problemas de la muy compleja situación de los derechos humanos en el país. Subsisten los mismos problemas de derechos humanos que el Relator Especial mencionó en el anterior período de sesiones de la Asamblea General y que forman parte de una situación general de los derechos humanos:

a) La existencia de millones de refugiados, que en sí misma es una cuestión de derechos humanos;

b) La continuación del conflicto armado que enfrenta al Gobierno con los grupos de la oposición, ambos apoyados por las superpotencias y que ocasiona destrucciones, pérdidas de vidas y ansiedad permanente entre la población de las zonas afectadas;

c) Los intentos por normalizar la vida en las zonas controladas por el Gobierno y por mantener el orden público dan por resultado acciones orientadas contra los que se oponen a la autoridad del Gobierno o que tienen ideas que se consideran contrarias a la Constitución;

d) La continuación de los actos de terrorismo, que afectan a la población civil de todas las ciudades y aldeas importantes, e incluso a personas que no quieren verse envueltas en el conflicto;

e) La lamentable situación económica, social y cultural que existe en muchas partes del país afecta a un gran sector de la población, sobre todo en las zonas no controladas por el Gobierno;

f) El hecho de que todavía no se puede lograr el derecho a la libre determinación debido a la profunda división del pueblo del Afganistán.

18. Es preciso mencionar los esfuerzos que por una parte realizan los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales por fomentar la cooperación internacional y, en particular, los esfuerzos de los gobiernos, por la otra. Su objetivo es mitigar los efectos perjudiciales del conflicto. No obstante, en gran parte esos esfuerzos se ven frustrados por el envío de suministros de armas y por la dificultad de llegar a un cese general del fuego.

19. En los capítulos siguientes, el Relator Especial quiere proporcionar información concreta relativa a los problemas mencionados. Esa información proviene principalmente de sus visitas al país, de las numerosas conversaciones que sostuvo durante las visitas a campamentos de refugiados, cárceles y hospitales, así como de las impresiones obtenidas mientras estudiaba la situación de los derechos humanos en diferentes partes del Afganistán.

20. Para comprender mejor la situación de los derechos humanos en el Afganistán, se ha de tener presente el hecho de que el Gobierno del Afganistán no está en condiciones de ejercer un control total en todas las zonas del país. La cuestión de la jurisdicción se aborda en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (resolución 2200 A (XXI), anexo). Según el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que el Afganistán es parte, "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto". Aunque el Gobierno no ejerza un poder efectivo en todo su territorio, eso no significa que haya renunciado a su soberanía territorial, pese a que determinadas regiones del Afganistán estén en parte o totalmente controladas por los grupos de la oposición. Esos grupos están igualmente obligados por las normas internacionales de derechos humanos y los principios de los derechos humanos recogidos en los diversos instrumentos internacionales.

21. La información recibida de diversas fuentes indica que el Gobierno controla la zona de Kabul, las carreteras principales y todas las capitales de provincias salvo Asadabad (provincia de Kunar) y, según la información más reciente, Tarin Kot (provincia de Urusgan). El Relator Especial tiene la impresión de que en todas las zonas controladas por el Gobierno funciona una administración que procura aplicar la ley y garantizar el orden público. Con todo, en las zonas no controladas por el Gobierno o en las llamadas "zonas de paz", que la oposición denomina "zonas liberadas", la administración está en manos de las autoridades locales o tribales y, en muchos casos, de los jefes militares. Ese tipo de autoridad se ejerce en lo que se refiere a la administración civil solamente en las zonas que no han sido abandonadas por la población civil o a las que han regresado familias de refugiados. Una fuente bien informada dijo al Relator Especial que hay casi 140 "gobiernos" en el Afganistán. El Gobierno afirma que mantiene contactos indirectos con los grupos de la oposición y que comparte con ellos

la responsabilidad de los derechos humanos en las zonas que controlan. El Gobierno afirma que desde la proclamación de la política de reconciliación, se abstiene de asumir militarmente el control de esas zonas. Por lo tanto, los incidentes relativos a las violaciones de los derechos humanos se deben considerar caso por caso.

22. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) ha estudiado a fondo la situación en varias provincias del Afganistán. La reunión de datos para el proyecto de repatriación de afganos abarca informes con 14 perfiles provinciales. Esos informes proporcionan un excelente análisis de la situación concreta en diversas provincias. El Relator Especial desea hacer referencia especial a los informes sobre las provincias de Kunar y de Kandahar que visitó.

B. La situación de los refugiados

23. La situación de los refugiados afganos es un importante problema de derechos humanos. Consciente de esta situación, el Relator Especial ya ha explicado varias veces que los refugiados, y en particular los que residen en campamentos y no están integrados en la sociedad local, pueden verse en situaciones difíciles que crean problemas de derechos humanos, que pueden referirse al derecho a circular libremente y a escoger libremente su residencia (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los derechos de las familias, los derechos de los niños y una serie de derechos sociales, culturales y económicos. La situación de las viudas se examinó en el último informe a la Asamblea General (véase A/44/699, párr. 31 y siguientes). A este respecto, no se han observado cambios importantes. De hecho, está disminuyendo la ayuda que prestan las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos. Además, parece que la salud se está deteriorando en los campamentos, donde se han registrado casos de malnutrición, paludismo y tuberculosis, así como diversos fallecimientos de niños a causa del calor que ha hecho este verano. Se informa también que ahora se están quemando arbustos en los campamentos por falta de leña, práctica que podría tener consecuencias perjudiciales para el equilibrio ecológico de las zonas circundantes.

24. En esta ocasión el Relator Especial no visitó los campamentos de refugiados de la República Islámica del Irán.

25. El número total de los llamados refugiados registrados en el Pakistán se sigue situando en torno a los 3,2 millones y el número de refugiados no registrados es de alrededor de 500.000. El desglose por provincias de los refugiados que viven en el Pakistán es el siguiente: 2.243.556 en la Provincia de la Frontera del Noroeste; 850.000 en el Beluchistán; 179.500 en el Punjab y 18.600 en el Sind. Puesto que esta vez el Relator Especial no visitó los campamentos de refugiados de la República Islámica del Irán, se hace referencia a la información contenida en el párrafo 34 de su último informe a la Asamblea General (A/44/669), en la que se señaló que el número de refugiados afganos en ese país ascendía a 2,3 millones.

26. El artículo I del Convenio II de los Acuerdos de Ginebra sobre el arreglo de la situación relativa al Afganistán "establece que se ofrecerá a todos los refugiados afganos que se encuentran temporalmente en el territorio de la República Islámica

del Pakistán la oportunidad de regresar voluntariamente a su patria de conformidad con las disposiciones y condiciones enunciadas en el presente Convenio (S/19835, anexo I). En su último informe a la Asamblea General (A/44/669, párr. 26), el Relator Especial dijo, entre otras cosas, que 'el hecho es que los refugiados no han regresado en las proporciones masivas que se esperaba tras el retiro de las tropas soviéticas del Afganistán'. En su último informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1990/25, párr. 16), señaló que "este retorno aún no se ha producido en cantidades apreciables".

27. En 1990 parece que no han llegado nuevos refugiados al Pakistán y que la tendencia al regreso al Afganistán se está acentuando. En una nota sobre la repatriación voluntaria al Afganistán publicada por la OACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en julio de 1990, se explicaba que las Naciones Unidas han observado que estos últimos meses un gran número de familias han regresado cada día al Afganistán, procedentes principalmente del Beluchistán, pero también de la Provincia de la Frontera del Noroeste del Pakistán. Ese movimiento, que se considera espontáneo, obedece en parte al inicio de un proyecto experimental sobre repatriación voluntaria al Afganistán, establecido para el período del 15 de julio al 15 de octubre de 1990 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Coordinador de Programas de Asistencia Humanitaria Económica de las Naciones Unidas en relación con el Afganistán, y el Director Ejecutivo del PMA, en cooperación con el Gobierno del Pakistán.

28. Fuentes pakistaníes indican que un promedio de 250 familias han salido diariamente del Pakistán desde julio de 1990, lo que representa unas 1.700 personas. La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados informó al Relator Especial de que el número total de refugiados que regresaron entre el 23 de julio y el 17 de octubre de 1990 era de unas 11.000 familias. Con arreglo al proyecto experimental ya mencionado, cada familia que regresa recibe una prima de repatriación, por una sola vez, de 3.300 rupias en efectivo y un paquete de asistencia alimentaria de 300 kg de trigo previa entrega de sus cartillas de racionamiento a las autoridades competentes en los puntos de partida designados. Hay seis puntos de partida de ese tipo en la provincia de la Frontera del Noroeste (Chitral, Khar Bajaur, Landi Kotal, Parachinar, Miranshah y Wana) y diez en la provincia de Beluchistán (véase anexo I).

29. El Relator Especial tuvo ocasión de volver a discutir estos problemas con el Ministro afgano para los Asuntos de los Repatriados. Se deploró el hecho de que no se hubiera informado al Gobierno afgano acerca del proyecto experimental antes de su establecimiento y que sólo se le puso al corriente a posteriori. Cuando se inició el proyecto experimental, se estableció una Comisión especial de Coordinación para los Repatriados y se tomó la decisión de aceptar a los refugiados que regresaban en albergues y campamentos de acogida creados al efecto. Se pidió a todas las autoridades militares que velaran por la seguridad de los repatriados y sus bienes y que consiguieran mapas exactos de las carreteras por las que viajaban los repatriados a fin de suspender las operaciones militares. Además del alojamiento, el Gobierno afgano decidió ayudar a los refugiados entregando a cada familia seis instrumentos de labranza, así como un suministro de aceite comestible, azúcar, té y harina. De las 30.000 ó 40.000 familias previstas, sólo unas 7.000 han regresado desde el inicio del proyecto experimental. En su mayoría los repatriados regresaron a las zonas no controladas por el Gobierno. Se estima que un promedio

de 150 a 200 personas regresan diariamente provenientes de la República Islámica del Irán. A este respecto, convendría también iniciar un proyecto experimental similar y para ello habría que celebrar conversaciones con las autoridades iraníes.

30. El Ministro para los Asuntos de los Repatriados señaló que desde la introducción de la política de reconciliación nacional en su país, 277.110 personas han regresado al Afganistán. El Gobierno afgano afirma que los bienes de los repatriados, que estaban bajo la custodia del Estado, les son devueltos con la excepción de la tierra agrícola. El problema principal es el transporte de los refugiados. La OACNUR, junto con el Gobierno, ha organizado un puente aéreo con aeronaves civiles, entre Herat y Mazar-i-Sharif y Kabul. El Relator Especial pudo observar una operación de transporte aéreo en Herat y tuvo ocasión de hablar con refugiados que regresaban de la República Islámica del Irán. Una persona dijo que regresaba porque el ejército extranjero se había retirado de su país.

31. El Gobierno afgano ha establecido cuatro puntos de recepción, 29 albergues de paz (ocho de los cuales disponen de clínicas), 12 campamentos de acogida y un albergue-campamento. Se prevé el establecimiento de otros dos albergues de paz. Se han tomado disposiciones para conseguir 1.100 vehículos si es que hay que repatriar a miles de refugiados.

32. El Gobierno afgano ha reservado 2.000 millones de afganis como asignación extraordinaria al presupuesto del Ministerio para los Asuntos de los Repatriados a los efectos de la repatriación. En comparación con las asignaciones presupuestarias a otros ministerios, esta suma es muy superior al promedio.

33. El número de repatriados todavía no ha sobrepasado la cifra real de refugiados fuera del Afganistán. Se plantea la pregunta de por qué no es mayor el número de personas que regresan. La respuesta sigue siendo la misma de antes: la problemática situación de la seguridad en las provincias, la destrucción de la mayor parte de la infraestructuras del país, la existencia de munición y de minas sin explotar, los bombardeos y ataques con cohetes en diversas regiones, la ausencia de un gobierno islámico y el hostigamiento al que pueden verse sometidos los refugiados que regresan.

34. El Relator Especial pudo entrevistarse con los jefes de dos familias que habían querido regresar a sus aldeas en la provincia de Helmand y Kandahar, pero grupos de personas armadas se lo habían impedido. Habían sido robados, habían quemado sus propiedades y un hijo de cada familia había sido obligado a ingresar en las filas de las fuerzas de la oposición. Se les había dicho que sólo quedarían en libertad si pagaban 20.000 rupias. Habían dado muerte a la hermana de uno de los jefes de familia. Incluso en círculos favorables a las opiniones políticas del llamado Gobierno Provisional Afgano se dice que ha habido cientos de incidentes de ese tipo.

35. El mencionado proyecto experimental se anunció en una notificación conjunta publicada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Gobierno del Pakistán (véase anexo I). No obstante, se distribuyeron entre los refugiados las contraproclamas, publicadas por un grupo de jefes de muyahidíes islámicos (véase anexo II), instándolos a que no regresaran. Se comprende que las proclamas de este tipo y el hostigamiento al que son sometidos los repatriados influye en su decisión de no regresar.

C. Derechos civiles y políticos en las zonas controladas por el Gobierno

36. El estado general de emergencia, declarado el 19 de febrero de 1989 inmediatamente después de la retirada de las tropas soviéticas del Afganistán, se levantó el 28 de mayo de 1990, cuando se convocó un Loya Jirgah. El Secretario General de las Naciones Unidas fue debidamente informado, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La terminación de este estado de emergencia no ha tenido una incidencia particular en la situación de los derechos humanos, aparte del hecho de que en dos ocasiones se practicaron detenciones masivas en relación con dos intentos de levantamiento en diciembre de 1989 y en marzo de 1990.

37. La Constitución de la República del Afganistán de diciembre de 1987 fue enmendada en junio de 1990, tras levantarse el estado de emergencia. El Loya Jirgah ha aprobado las enmiendas a la Constitución, que no modifican la estructura de las disposiciones relativas a los derechos humanos. En particular no se ha modificado el capítulo 3 y las disposiciones relativas a los derechos humanos siguen conteniendo muchas cláusulas de reserva que se deberían especificar con más claridad mediante leyes pertinentes.

38. El texto de la nueva Constitución establece el pluralismo político. Se han eliminado todas las referencias al partido dirigente, el Partido Democrático Popular Afgano (PDPA). Se ha aprobado una nueva Ley sobre los partidos, que permite el sistema pluripartidista, y se han creado varios partidos políticos. Entre ellos el sucesor del PDPA, el nuevo partido "Watan", ocupa el lugar más destacado. Aquí cabe mencionar que se ha abrogado el artículo 6 de la anterior Constitución, relativo al Frente Nacional de la República del Afganistán (una especie de organización principal), y el Frente Nacional ha sido sustituido por un Frente de Paz que parece ser una coalición de los partidos existentes. Ciertos críticos opinan que, pese a esos cambios en la Constitución y a una delimitación más clara del poder del Estado entre los órganos legislativos, judiciales y ejecutivos, las realidades políticas siguen siendo las mismas. El partido Watan es el partido gobernante y en el nuevo Gobierno, que comprende 17 personas independientes del partido, las carteras más importantes, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio para la Seguridad del Estado siguen estando en manos de miembros del partido. El Presidente de la República sigue siendo una figura destacada dentro del partido, pese a una reducción de sus competencias conforme a la nueva Constitución. Además, la radio y la televisión siguen estando bajo la influencia única del partido.

Libertad y seguridad personales 1/

39. El Relator Especial ha recibido denuncias de que miles de afganos han sido encarcelados en la Unión Soviética. Se dice también que existen campamentos de detención clandestinos. Uno de ellos, el llamado campamento "Battery", parece estar ubicado en una base de artillería en Rabat, cerca de Ghardez en la provincia de Paktika. Otras denuncias se refieren a los presos políticos en el país que según se afirma son unos 90.000. Se denuncia también que los presos de la cárcel central de Pol-i-Charkhi fueron trasladados a la Academia Militar, ubicada entre Kabul y

Pol-i-Charkhi, durante las visitas que hicieron a la cárcel los representantes de las organizaciones internacionales. No obstante, el Relator Especial no pudo obtener confirmación de esas denuncias.

40. Para calcular el número efectivo de presos es necesario hacer una distinción entre los condenados y los demás presos. Los condenados se hallan bajo la autoridad del Ministerio del Interior. El CICR ha visitado a presos de esa categoría en la cárcel provincial de Pol-i-Charkhi y otras cárceles provinciales.

41. Hay que tomar en consideración las siguientes cifras, proporcionadas por el Ministerio del Interior:

<u>Ciudad</u>	<u>Presos comunes</u>	<u>Presos políticos</u>	<u>Total</u>
Kabul	827	1 963	2 790
Helmand	33	23	56
Balkh	235	197	432
Nangarhar	130	72	202
Badgis	4	2	6
Djodzjan	96	50	146
Farah	16	66	82
Samanghan	12	-	12
Baghlan	30	-	30
Konzar	51	50	101
Badaghshan	6	12	18
Khost	9	4	13
Paktia	12	2	14
Parwan	9	12	21
Herat	59	101	160
Faryab	27	20	47
Kandahar	-	1	1
Nimruz	8	7	15
Ghourat	1	-	1

42. Esas cifras se pueden comparar con las indicaciones sobre la población penal que figuran en anteriores informes del Relator Especial, presentados a la Asamblea General en 1989 (A/44/669) y a la Comisión de Derechos Humanos en 1990 (E/CN.4/1990/25):

<u>Fecha del informe</u>	<u>Total</u>	<u>Presos políticos</u>
Octubre de 1989	3 907	2 584
Enero de 1990	4 302	2 789
Octubre de 1990	4 147	2 582

43. El número de detenidos bajo la autoridad del Ministerio del Interior asciende en total a 4.147, de los cuales 2.582 son "políticos" y 1.565 presos comunes. La mayoría de los presos cumplen condenas de más de 10 años, aunque 500 pronto serán puestos en libertad.

44. En el momento de la visita del Relator Especial a Pol-i-Charkhi, el 24 de septiembre de 1990, se le dijo que el número total de presos ascendía a 2.686, incluidas 29 mujeres y 35 extranjeros (24 pakistaníes, 7 iraníes, 2 iraquíes, 1 egipcio, 1 jordano, 1 malasio y 1 árabe de nacionalidad no determinada). También se dijo al Relator Especial que 104 presos habían sido puestos en libertad el 23 de septiembre de 1990. Entre ellos había dos presos iraníes, con lo que en total 6 iraníes han sido puestos en libertad desde su última visita.

45. Se comunicó al Relator Especial que, desde la introducción en 1987 de la política de reconciliación nacional, 19.514 presos habían sido puestos en libertad en virtud de 20 decretos de amnistía general. Además, se han promulgado 366 decretos de amnistía individual. Se informó de que 67 presos habían sido puestos en libertad en junio de 1990, 54 en julio, 63 en agosto y 24 en septiembre. La última amnistía se promulgó el 23 de septiembre de 1990. El número de presos no es estable. Desde 1987, el aumento medio de la población penitenciaria ha sido de unos 2.000 al año. El número de presos que ingresan es inferior al número de los que son puestos en libertad.

46. Parece que han mejorado las condiciones de detención en los pabellones 3, 4 y 5 de la cárcel de Pol-i-Charkhi. Las celdas están menos atestadas, se han introducido cursos de alfabetización y de formación profesional y se han organizado cursos prácticos. Las visitas de las familias son más frecuentes que antes. En cuanto a la política de reconciliación nacional, parece que en las cárceles se ha introducido un "plan de reconciliación". Con arreglo a ese plan, eminentes juristas explican la reconciliación a los presos y, una vez que las autoridades de la cárcel consideran que los presos han aceptado la política de reconciliación, se propone la revisión de sus casos a los tribunales con miras a reducir su pena o promulgar una amnistía.

47. No obstante, cuando el Relator Especial visitó las celdas de los condenados extranjeros, éstos se quejaron de las condiciones de detención en presencia de las autoridades de la cárcel. Aparte de ciertos casos individuales, incluida una huelga de hambre, se plantearon problemas generales como por ejemplo la alimentación deficiente, la falta de atención médica, el hecho de que los presos políticos están juntos con los presos comunes, que los drogadictos están juntos con los que no lo son o que presos con trastornos están junto con presos mentalmente sanos. A juicio del Relator Especial, esas condiciones constituyen una violación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (resoluciones 663 C (XXIV) del Consejo Económico y Social, de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXIII), de 13 de mayo de 1977) y se deben tomar disposiciones para que los presos con trastornos mentales estén bajo la supervisión de un médico.

48. Además de los condenados, hay personas en espera de juicio, una vez terminada la instrucción, presos en espera de sentencia, presos en espera de que se terminen los trámites administrativos que siguen al veredicto y presos en curso de

instrucción. Todas estas categorías de presos están bajo la autoridad del Ministerio para la Seguridad del Estado. El número de esos presos, detenidos en los pabellones 1 y 2 de Pol-i-Charkhi, era según se informó 574, en comparación con 364 en septiembre de 1989. Entre ellos hay 26 personas en curso de instrucción, 319 en espera de juicio o de sentencia y 229 condenados reclusos en los pabellones 1 ó 2 durante un "período administrativo", ya sea en espera de un procedimiento ante el tribunal de apelaciones o de última instancia, o en espera de que se cumplan los trámites. Se dijo que varios presos permanecían reclusos en esos pabellones a petición propia. Al parecer gozan de los mismos derechos y privilegios que los demás presos, pero sólo las personas en espera de juicio no pueden recibir visitas de sus familiares. Se informó al Relator Especial de que no había mujeres ni extranjeros entre esos presos.

49. El Ministro para la Seguridad del Estado indicó que el número total de personas sometidas a interrogatorio ascendía a 1.247, de las cuales 726 estaban detenidas en Kabul y 521 en las provincias. Entre ellas figuran personas sospechosas de haber participado en el intento de levantamiento de marzo de 1990. Ya casi se ha terminado la investigación de estas personas. El Relator Especial fue informado de que las causas correspondientes se verían en tribunales civiles.

50. La situación de los presos no condenados es bastante incierta. Se debe tener presente el párrafo 84 de las ya mencionadas Reglas Mínimas que estipula que "el acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia". Hasta la fecha el CICR no ha tenido ocasión de estudiar la situación de esta categoría de presos. Aunque el Ministro para la Seguridad del Estado ha dado un acuerdo de principio al respecto, hasta ahora esas visitas no se han podido efectuar y las negociaciones siguen adelante.

51. El Relator Especial recibió información sobre las enmiendas al párrafo 5 del artículo 41 de la Ley de condiciones de detención e interrogatorio. Esa ley ha introducido algunas mejoras orientadas a hacerla más conforme con las disposiciones pertinentes del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con todo, el hecho de que las personas detenidas pueden estar bajo custodia policial durante más de tres días permite dudar de si esta práctica se puede considerar conforme con el párrafo 3 del artículo 9, incluso si esa detención prolongada está amparada por una decisión del tribunal.

52. Con respecto al problema de la tortura y los malos tratos a los presos, se recibió información de que la privación de sueño es práctica constante durante el interrogatorio. Se informó además de que el General de Brigada Abdul Sami Azisi, mencionado en enero de 1990 como uno de los oficiales detenidos durante el intento de golpe de Estado de diciembre, había sido torturado hasta la muerte en la cárcel.

53. Se ha señalado que los órganos de la seguridad estatal siempre vigilan las actividades de personas supuestamente involucradas en actividades políticas, que sin vacilar se interpretan como dirigidas contra la seguridad del Estado. Amnesty International informa de las detenciones por la policía de seguridad (WAD) de los miembros fundadores del Partido de Unidad Nacional de reciente creación, incluido el Profesor Mohamed Mohsen Formaly (que ha sido puesto en libertad), el Dr. Abdul Jalil y el Sr. Mohamad Hakim. El Relator Especial no pudo ver ni al Dr. Jalil ni al Sr. Hakim.

54. El Ministro de Seguridad del Estado informó al Relator Especial de que los órganos de la seguridad del Estado habían violado la ley en siete ocasiones. Varias personas fueron declaradas culpables, mientras que en otros casos se dieron "excusas administrativas". El Gobierno ha indicado que no permitirá que se cometan actos contra los derechos de los ciudadanos.

El derecho a la vida

55. En todos los contextos de derechos humanos el derecho a la vida ocupa un lugar fundamental entre los demás derechos humanos y su respeto está estrechamente vinculado con la paz en un país dado. Un conflicto armado en un país afecta al derecho a la vida. En el Afganistán no es posible determinar con exactitud el número de soldados, miembros de los grupos de oposición y civiles muertos a causa de la situación existente. Sólo cabe citar las cifras proporcionadas por el Gobierno acerca del número de civiles muertos y heridos durante los 10 últimos meses como resultado de actos terroristas: 4.771 muertos y 11.756 heridos.

56. Se siguen dictando sentencias de muerte, pero en los juicios se aplica un procedimiento más regular y parecen ser menos arbitrarios que en el pasado. Se informó también al Relator Especial de que la pena capital se aplica en casos de actos terroristas o de asesinatos en masa. Desde el punto de vista jurídico, cabe esperar que se impongan sentencias de muerte en los juicios contra los participantes en el intento de golpe contra el Gobierno en marzo de 1990.

57. Las recientes enmiendas a la Constitución introdujeron la ley islámica (ley cherámica), como una de las dos bases jurídicas del Afganistán. De acuerdo con la ley cherámica una persona condenada a muerte por el delito de homicidio sólo puede ser perdonada si la familia de la víctima consiente en que no se cumpla la sentencia de muerte. Así 50 personas condenadas a muerte han sido perdonadas y 10 sentencias de muerte han sido ejecutadas. Después de la adopción de la nueva Constitución, el Presidente de la República creó una comisión jurídica consultiva que se ocupa específicamente de la pena de muerte. Se supone que esa comisión se ocupará de los casos de las personas sospechosas de haber participado en el levantamiento de marzo, con miras a reducir la severidad de las sentencias.

El derecho a la educación

58. El Relator Especial se volvió a reunir con el Ministro de Enseñanza Superior y Formación Profesional, quien se ocupa esencialmente de las universidades y de las escuelas de formación profesional del país. En general, se confirmaron las cifras presentadas por el Relator Especial en su último informe a la Asamblea General (A/44/669, párrafos 58 y siguientes). En las instituciones de enseñanza superior hay actualmente 13.500 estudiantes de ambos sexos y 1.000 profesores, y en las escuelas de formación profesional 12.000 estudiantes y 1.200 instructores. El número de profesores que han salido del país en 1990 a causa de los ataques con cohetes a las universidades y de la situación general de inseguridad se ha multiplicado por 20. Las Universidades de Herat y de Mazar-i-Sharif no han sufrido muchos daños, pero la Universidad de Nangarhar ha sido destruida casi completamente por unos 2.000 cohetes. La Universidad de Kabul estuvo cerrada de abril a septiembre de 1990 debido a los intensos ataques con cohetes lanzados por las fuerzas de oposición.

59. Como se mencionaba en el párrafo 68 del informe anterior a la Asamblea General, parece haberse restablecido la autonomía de las universidades. El Ministro de Enseñanza y Formación Profesional Superior, el mismo profesor, dijo que todos los puestos académicos en la administración universitaria eran electivos. Se informó al Relator Especial de que las elecciones para los cargos de decanos, rectores y jefes de departamento en la Universidad de Kabul tuvieron lugar en noviembre de 1989 sin injerencia del Gobierno ni del Partido. Parece que la atmósfera ha mejorado y los resultados alentadores en las elecciones universitarias indican que ha cesado la politización de la vida universitaria.

60. Los recursos financieros disponibles para las universidades son escasos, lo que dificulta el mantenimiento de los niveles académicos. Aparte de un amplio programa de la oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán, que se dirige principalmente a los repatriados, las Naciones Unidas no tienen un programa específico de asistencia para la enseñanza superior. Los medios disponibles son insuficientes para reparar los daños y crear bases nuevas para una vida universitaria completa.

61. Se informó al Relator Especial de que la UNESCO, que reinició sus actividades en el país en marzo de 1990, podría organizar, como en el pasado, programas de asistencia orientados a las necesidades de educación y formación. Debería ayudarse a las instituciones de enseñanza en las tareas de reparación y construcción y la UNESCO también podría ayudar a conseguir libros, revistas académicas, equipo de laboratorio y otros materiales.

62. En contraste con informes anteriores, el Relator Especial se complace en señalar que ahora no se descuida el derecho a disfrutar de la cultura, tal como fue proclamado el 4 de noviembre de 1966 por la UNESCO en su Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional. A ese respecto, se proporcionará ayuda al Museo de Kabul y a los Archivos Nacionales para la evaluación de los daños a los monumentos nacionales y la preparación de un inventario arquitectónico a través de la puesta en práctica del programa de asistencia al Afganistán de la UNESCO.

Derecho a la libertad de religión

63. Una vez más, el Relator Especial analizó el problema del derecho a la libertad de religión con representantes del Consejo Supremo de Ulemas del Afganistán. Se le explicó que actualmente no había líderes religiosos arrestados. El año pasado seis mezquitas de Kabul fueron destruidas parcial o completamente por ataques con cohetes. Hay un programa anual de reparaciones y de reconstrucción que ejecuta el Ministerio de Asuntos Islámicos. Las comunidades interesadas se hacen cargo de la mitad de los gastos. Representantes de los ulemas declararon que no había opresión religiosa desde que las tropas soviéticas dejaron el país. Dijeron que entre 7.000 y 10.000 mullahs estaban inscritos como miembros de la organización, fundada en 1980. Se estima que siguen fuera del país entre 500 y 1.000 mullahs. Entre los que regresaron al país unos 1.000 ingresaron en la organización, que se propone cooperar con el Frente de la Paz.

64. El Relator Especial preguntó a los líderes religiosos representantes del Consejo Supremo de Ulemas del Afganistán cuál era su opinión sobre el texto de la proclama de los comandantes de los muyahidin islámicos (véase Anexo II) instando a los refugiados a no retornar al país. Su respuesta fue de que rechazaban totalmente dicha proclama.

Derechos económicos y sociales

65. El goce de los derechos económicos debe considerarse en el contexto de la situación de guerra que existe en el país. Se han destruido caminos y aldeas, no funcionan muchos sistemas de riego y no se han reanudado las actividades agrícolas normales. Los precios han sufrido una fuerte inflación, mientras los salarios no han subido en la misma proporción. La población puede sobrevivir en gran parte gracias a la ayuda de las Naciones Unidas, como la suministrada por la Oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán y por organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país. El Gobierno puede prestar ayuda a la población de las ciudades. Entre los niños es común la malnutrición y suele ocurrir que las escuelas se vean forzadas a cerrar por esa causa. En zonas rurales, que también carecen de centros básicos de salud, se han registrado casos de inanición (por ejemplo, en la provincia de Faryab). Sigue habiendo invasiones de langostas y plagas de los cultivos de cañamo de Bengala, como los señalados en el párrafo 72 del último informe del Relator Especial a la Asamblea General (A/44/669). Los informes del ACNUR sobre las provincias proporcionan una ilustración elocuente de la situación económica que existe en diversas partes del Afganistán.

66. Se informó al Relator Especial de que después de la retirada de las tropas soviéticas se estableció una Comisión especial para combatir el uso indebido de drogas en el Afganistán. Las autoridades se manifestaron dispuestas a concluir acuerdos bilaterales en esa esfera. Desde la creación de la Comisión han sido decomisados y destruidos 1.700.000 kilogramos de hashish, 114.000 kilogramos de heroína y 11.500 kilogramos de opio. Sólo en los últimos seis meses han sido decomisados y destruidos 800 kilogramos de hashish. Parece que hay 3.447 toxicómanos registrados en el país, 1.200 de los cuales están en tratamiento. Han sido detenidos 180 contrabandistas de drogas.

67. Cabe señalar a la atención de la Asamblea General una nueva característica de la Constitución enmendada del Afganistán. El artículo 19 protege todas las formas legales de propiedad, y el artículo 20 permite las inversiones privadas en la silvicultura, los pastos, los recursos energéticos, las minas y las comunicaciones. Sería sin embargo prematuro juzgar en qué medida la introducción de estas disposiciones en la Constitución puede influir en la actividad del sector privado. El Gobierno está dispuesto a restituir sus bienes a los repatriados. De acuerdo con el decreto 789 sobre restitución de bienes se devolverán sus bienes a todas las personas que dejaron el país antes de junio de 1990 o cuyos bienes dentro o fuera del país fueron puestos bajo la custodia del Estado, directamente a los interesados o a sus representantes legales o sus legítimos herederos.

68. La existencia de personas desplazadas también ha creado problemas económicos en las principales ciudades. En Mazar-i-Sharif se explicó al Relator Especial que la población de la ciudad, que era originariamente de 140.000 habitantes,

había aumentado a 350.000. Desde el comienzo de la política de reconciliación nacional han regresado a la ciudad 5.000 personas. Los problemas de infraestructuras son especialmente graves. La administración de la ciudad ofrece parcelas para la construcción de viviendas; hasta ahora se han distribuido 3.000 parcelas, pero hay 40.000 solicitudes registradas. Las escuelas deben funcionar en cuatro turnos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Diversas organizaciones internacionales están ayudando a resolver esos problemas.

D. Situación de los derechos humanos en las zonas
no controladas por el Gobierno

69. Por primera vez desde el comienzo de su mandato, el Relator Especial pudo visitar las zonas del Afganistán que no están bajo el control del Gobierno. Tras entrar en la provincia de Kunar por el puerto de Nawa, visitó el distrito de Asadabad, donde se reunió con un Shura (consejo consultivo) del llamado Gobierno Provisional Afgano. El Shura estaba integrado por miembros del Hezb-i-Islami, el partido del comandante Gulbuddin Hekmatyar y por miembros del Salafi Shura, dirigido por Mulavi Jamil Rehman.

70. En la provincia de Kandahar, donde se adentró pasando por Chaman y Spin Boldak, el Relator Especial visitó el distrito de Arghestan, donde se reunió con un Shura local encabezado por Mulavi Habidullah y un Jirgah encabezado por Haji Abdul Razziq, quien está encargado de los asuntos relativos a la Hajj (peregrinación a la Meca) en el llamado Gobierno Provisional Afgano.

71. La visita a esas dos provincias no permite hacerse una idea completa de la situación en las zonas no controladas por el Gobierno, que parece diferir según las provincias y según los distritos. En algunas zonas se afirma que existen contactos con el Gobierno afgano. Sin embargo, todos los dirigentes con quienes habló el Relator Especial en Kunar y Kandahar declararon de manera inequívoca que no existen tales contactos y que no se han concluido protocolos ni acuerdos escritos de ningún tipo con el Gobierno.

72. Una característica común a todas las zonas no controladas por el Gobierno es la ausencia de una administración central. El llamado Gobierno Provisional Afgano no tiene infraestructuras administrativas en las provincias, sino que actúa a través de comandantes y de Shuras, que están compuestos de comandantes y dirigentes religiosos versados en la ley cherámica. Debe señalarse que hay zonas casi totalmente despobladas o con muy poca población. El Relator Especial tiene la impresión de que la administración está básicamente en manos de las facciones militares de la región. Sólo unas pocas provincias parecen tener una vida civil normal.

73. Se explicó al Relator Especial que en Kunar hay 200 escuelas, en su mayoría primarias. La enseñanza se imparte separadamente a niños y niñas. Hay también 24 clínicas y dos hospitales centrales, que se han construido con ayuda extranjera.

74. En Kandahar se informó al Relator Especial de que hay unas 50 escuelas, con una enseñanza predominantemente religiosa. Además se pudo ver que en las provincias de Kunar y de Kandahar no hay una infraestructura vial.

75. La garantía de libertad personal en las zonas no controladas por el Gobierno ha de considerarse en el contexto del conflicto armado. Hay cárceles controladas por diferentes partidos, incluso hay uno que tiene una cárcel en su cuartel general, pero el Relator Especial no pudo visitar ninguna de ellas. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha tenido ocasión de entrevistar a un pequeño número de presos.

76. Muchas zonas, en particular las que no están bajo el control del Gobierno, están minadas. En las zonas controladas por el Gobierno hay campos de minas alrededor de las instalaciones militares y en instalaciones económicas importantes. El problema de los campos de minas en el país tiene una relación fundamental con el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. Los hospitales están llenos de personas que han sido heridas por explosiones de minas.

77. Tratando de contribuir a la solución del problema de las minas, el Relator Especial buscó obtener información al respecto. Discutió el problema con personal de la oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán, con el Ministro de Defensa en Kabul y con representantes de la Comisión especial para la limpieza de campos de minas, establecida recientemente por el Primer Ministro y el Consejo de Ministros del Afganistán y visitó sobre el terreno las operaciones de limpieza de campos de minas realizadas por las Naciones Unidas.

78. De acuerdo con los mapas de los campos de minas proporcionados por el Gobierno afgano y las estimaciones de la Comisión para la limpieza de campos de minas, el ejército afgano ha colocado alrededor de 1 millón de minas y las tropas soviéticas 500.000. Se estima que las fuerzas de oposición colocaron alrededor de 1 millón de minas. En la Comisión para la limpieza de los campos de minas se le mostraron al Relator Especial los mapas de campos de minas de que dispone el Gobierno afgano. Esos mapas contienen indicaciones detalladas acerca de la situación de las minas colocadas por el ejército afgano y las tropas soviéticas. No hay mapas de los campos de minas colocados por las fuerzas de oposición. El Gobierno manifestó una vez más su disposición a cooperar con las Naciones Unidas en la detección y la limpieza de los campos de minas, pero expresó dudas con respecto a la manera en que el personal que ha seguido cursos sobre la limpieza de campos de minas aplica los conocimientos adquiridos. La Comisión para la limpieza de campos de minas proyecta abrir una escuela de detección de minas, adiestrar a 38 perros y poner en marcha una campaña de publicidad y sensibilización dirigida al público en general sobre el peligro que representan las minas.

79. Hay que señalar que el ejército afgano y las tropas soviéticas colocaron principalmente minas antipersonales, en tanto que las fuerzas de oposición colocaron minas antitanques y otras minas antivehículos. La limpieza de los campos de minas se complica por el hecho de que al parecer las fuerzas de oposición no levantaron sistemáticamente mapas de sus campos de minas. La detección de las minas se complica también por otros factores como los fenómenos meteorológicos y la acción de los animales, que desplazan las minas, lo que hace más difícil su detección incluso si existen mapas. Un problema adicional lo constituyen las municiones que no han explotado, que se ha dicho que representa un peligro aún mayor que el de las minas.

80. El Relator Especial fue ampliamente informado sobre las operaciones de limpieza de campos de minas en la oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán. Se ha organizado un programa de sensibilización del público y de eliminación de las minas, patrocinado por las Naciones Unidas, que está en curso de ejecución. La inspección inicial es llevada a cabo por el Organismo de planificación y de limpieza de campos de minas, que tiene equipos de inspección y reconocimiento en las provincias de Ghazni, Paktika y Kandahar. Un equipo adicional ha de empezar a trabajar en Paktika. Del norte del país se ocupan los Consejeros Técnicos Afganos, que tienen 17 equipos de limpieza de minas en las provincias de Bamiyan, Ghazni, Kunar y Paktika. Se están realizando operaciones regionales de limpieza de minas en los siguientes distritos de la provincia de Kandahar: Maruf, Argandhab, Arghistan y Zabul. El Organismo de limpieza de minas del sudoeste del Afganistán, proyectaba tener, para el 16 de octubre de 1990, 10 equipos de limpieza de minas listos para trabajar en el país. El equipo de 54 personas que opera en la zona de Sheihan del distrito de Arghistan ha inspeccionado un área de 525.209 metros cuadrados donde, desde el 9 de julio de 1990, encontró una gran cantidad de artefactos PMD6, POMZ-2, SB33 y MUV 2. También hay un Programa de sensibilización sobre el peligro que representan las minas en el cual recibieron instrucción 270.000 personas. Se proporciona a los refugiados, incluidos los niños, cursos básicos de limpieza de minas de seis horas y se distribuyen ilustraciones sobre los diversos tipos de minas. Hasta ahora, 9.302 afganos han seguido ese programa.

81. Expertos de las Naciones Unidas provenientes de Australia, Nueva Zelandia, los Estados Unidos de América y Noruega están impartiendo formación sobre la limpieza de minas en el campamento de formación para la limpieza de campos de minas de Risalpur, cerca de Peshawar, Pakistán. También se utilizan perros para la detección de minas. Según la información recibida en el campamento de Risalpur, en la provincia de Kunar se han limpiado en total 312.472 metros cuadrados de terreno minado y se han retirado 204 artefactos explosivos, y también se han limpiado 21,2 kilómetros de caminos y 6,8 kilómetros de canales, de donde se retiraron 24 artefactos antitanque y 178 artefactos antipersonal, así como 155 proyectiles sin explotar. En la provincia de Paktika se limpiaron 43.320 metros cuadrados de terreno y 23,23 kilómetros de caminos, retirando cuatro artefactos antitanque, 31 artefactos antipersonal y 21 proyectiles sin explotar. En la provincia de Bamiyan se limpiaron 12.066 metros cuadrados, retirando 15 minas antipersonal y 72 proyectiles sin explotar. En la provincia de Ghazni se limpiaron 16.260 metros cuadrados de terreno, retirando 292 minas antipersonal y 100 proyectiles sin explotar.

82. El total limpiado en todas las provincias asciende a 44,43 kilómetros de caminos, 6,8 kilómetros de canales y 383.818 metros cuadrados de terreno. El total de artefactos hallados es: 28 minas antitanque, 516 minas antipersonal y 348 proyectiles sin explotar.

Los derechos humanos a la luz del conflicto

83. En el Afganistán sigue habiendo un conflicto armado tal como se define en los Convenios de Ginebra. Se caracteriza por el enfrentamiento entre el ejército afgano y grupos armados de oposición y también por una guerra de guerrillas y ataques terroristas por parte de las fuerzas de la oposición, que utilizan armas

perfeccionadas provenientes del extranjero. También se han perpetrado ataques terroristas contra personal de las Naciones Unidas. Otra dimensión del conflicto es que hay enfrentamientos armados entre diversos grupos de la oposición y, más recientemente, entre los grupos étnicos Hazara y Pashtun.

84. Se ha alegado repetidamente que en la provincia de Kunar hay extranjeros en las filas de las fuerzas armadas de los movimientos de oposición. Parece que su comportamiento no corresponde a las costumbres prevalecientes en la región y que han cometido atrocidades, particularmente contra las mujeres. Representantes del llamado Gobierno Provisional Afgano se han disociado de tales acciones.

85. En este conflicto están en juego el derecho humanitario y los derechos humanos. No corresponde al Relator Especial especular sobre los elementos estratégicos, tácticos o políticos del conflicto, pero por su propia naturaleza afecta a los derechos humanos en el Afganistán, en particular el derecho a la vida (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9), el derecho a la seguridad de la persona (*ibid.*, artículo 14) y el derecho de propiedad (artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 114 del Cuarto Convenio de Ginebra).

86. En 1989 y 1990 el conflicto armado se ha desarrollado principalmente en torno a las ciudades y las aldeas y en zonas estratégicas, como las carreteras que unen las capitales de provincia entre sí y con Kabul, los aeropuertos y aeródromos y también las plazas fuertes de las fuerzas armadas de la oposición. Se han mencionado repetidamente las siguientes zonas, que han sido objeto de bombardeos de artillería, ataques con cohetes y operaciones de bombardeo y de limpieza: Samarkhad, las zonas de Jalalabad y Kabul, Kunduz, Paghman, Khost, Qualat (provincia de Zabul), Kandahar, Farah, Ghazni y Badgis. Se explicó al Relator Especial que el primer objetivo de las fuerzas del Gobierno es la defensa de las rutas de abastecimiento. Se alega que las fuerzas del Gobierno responden a las acciones de guerra de la oposición con actos indiscriminados de represalia que afectan también a la población civil. Por otra parte, en la zona de Kabul la población civil es la víctima más frecuente de los ataques de las fuerzas de oposición.

87. Las acciones que el relator especial considera actos de terrorismo, como se definen en el primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (véase A/43/742, párrafos 118 a 121 y A/44/669, párrafo 88) han disminuido en número pero han aumentado en intensidad. Los ataques terroristas son de diversos tipos: la matanza de civiles, la colocación de explosivos y el disparo de cohetes en zonas civiles. El Gobierno ha dicho que durante los siete últimos meses hubo 800.660 ataques con cohetes y bombardeos de artillería en todo el país, incluidos 2.086 ataques con cohetes contra Kabul. Estos ataques causaron la muerte de 4.771 civiles y heridas a 11.756, destruyeron 2.511 casas, 43 mezquitas y 3 templos hindúes. Además, resultaron destruidos o dañados 213 edificios públicos y 125 comercios. El Ministro de Seguridad del Estado afirma que esas cifras muestran una fuerte disminución del número de ataques. En muchos casos, los artefactos explosivos fueron detectados antes de explotar. Se han empleado los mismos tipos de cohetes que los mencionados en informes anteriores del Relator Especial. Este año, el Relator Especial ha sido nuevamente testigo de ataques con cohetes contra Kabul.

88. Se siguen denunciando amenazas y actos de intimidación en la zona de Peshawar y en torno a ella. El incidente más serio ocurrido recientemente fue la muerte en julio de 1990 del periodista pakistaní Mansoor Khan, a raíz según se dijo, de un violento ataque lanzado por fundamentalistas descontentos con su reportaje sobre la guerra en el Afganistán. Otros incidentes fueron el secuestro de un ciudadano canadiense y la explosión de una bomba en el Hotel Dean de Peshawar.

89. El número de heridos de guerra en los hospitales varía según los establecimientos. En el Hospital del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Kabul las admisiones aumentan de manera constante. Las estadísticas son las siguientes.

90. De enero a agosto de 1990, el número de admisiones en el Hospital Quirúrgico del Comité Internacional de la Cruz Roja de Kabul para heridos de guerra afganos fue de 2.672. El 26 de septiembre de 1990 había en el hospital 219 pacientes. En cierto momento, el número de pacientes llegó a 250, lo que representa la capacidad total del hospital. Aproximadamente el 70% de los heridos han sido víctimas de bombardeos y entre el 10% y el 15% de explosiones de minas.

91. El Hospital Quirúrgico del Comité Internacional de la Cruz Roja de Quetta para heridos de guerra afganos, registró 130 admisiones en febrero, un promedio de 140 a 160 al mes de marzo a junio, 176 en julio, 165 en agosto y 112 durante las dos primeras semanas de septiembre de 1990. El 19 de septiembre de 1990 había 120 pacientes. Se informó al Relator Especial de que en 1989, durante el período de la batalla de Jalalabad hubo más de 500 admisiones por mes.

92. En el Hospital del Comité Internacional de la Cruz Roja de Peshawar para heridos de guerra afganos se registró una cierta disminución del número de pacientes, que bajó en un promedio de 110 al mes. Pero en julio de 1990 hubo 182 admisiones. Durante los meses de la batalla de Jalalabad, el número medio de admisiones fue de 220 a 230 al mes.

93. Desde marzo hasta septiembre de 1990, el Hospital de la Academia Médica Militar "400 camas" de Kabul registró 2.374 admisiones de heridos de guerra. El número medio de pacientes hospitalizados bajó de 1.000 a 800. Se informó al Relator Especial de que los Ministerios de Seguridad del Estado y del Interior tienen sus propios centros médicos.

94. Se explicó al Relator Especial que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está en condiciones de trasladar heridos de guerra de zonas controladas por la oposición a su hospital de Kabul y reintegrarlos a su zona después del tratamiento.

95. En el Instituto Indira Gandhi de Salud Infantil de Kabul disminuyó el número de admisiones de niños heridos en la guerra. En 1988/1989 fueron admitidos 1.073 niños heridos de guerra, mientras que en 1989/1990 el número disminuyó a 400, aproximadamente.

96. Se informó al Relator Especial sobre las actividades de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja. Se deploraba la falta de cooperación con la Sociedad Pakistán de la Media Luna Roja y la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja declaró que, durante el período considerado, evacuó en sus ambulancias a 2.142 civiles heridos del distrito de Kabul a hospitales y transportó los cuerpos de 257 personas fallecidas.

97. La situación de los prisioneros no ha cambiado. El Gobierno afgano no reconoce a los miembros de las fuerzas de oposición capturados como prisioneros de guerra conforme a los Convenios de Ginebra. No hay duda de que los grupos de oposición hacen prisioneros, pero su suerte no está clara. Hasta ahora el CICR sólo ha tenido un acceso limitado a esos prisioneros. El Gobierno afgano y los comandantes de las fuerzas de la oposición a veces han intercambiado prisioneros. Un comandante dijo con toda franqueza al Relator Especial que ellos ejecutaban a los prisioneros que consideraban comunistas.

98. Tampoco está clara la suerte de los soviéticos hechos prisioneros por los grupos de oposición. Hasta ahora no ha habido acuerdo entre los grupos de oposición y la Unión Soviética sobre el intercambio de listas con nombres de prisioneros. Tampoco ha habido conversaciones entre la Unión Soviética y el Pakistán sobre el problema de los prisioneros. Con todo, una delegación de madres de prisioneros soviéticos visitó Peshawar y fue recibida por el llamado Gobierno Provisional Afgano que declaró haberles dado información acerca del paradero de sus hijos.

99. Los grupos de oposición manifestaron interés por la suerte de los afganos que habían sido capturados por las tropas soviéticas desde 1980 y que al parecer habían sido enviados a la Unión Soviética, de donde no habían vuelto.

Derecho a la libre determinación

100. En todos los informes recientes sobre el Afganistán presentados a la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, se ha reafirmado el derecho inalienable de todos los pueblos a determinar su propia forma de gobierno y a escoger su propio sistema económico, político y social libres de toda intervención exterior, coerción subversiva o coacción de cualquier naturaleza. Tanto la Asamblea como la Comisión han llamado también al diálogo entre los afganos para el establecimiento de un gobierno de base amplia.

101. Todas las partes en el conflicto afgano reconocen el derecho a la libre determinación. Sin embargo, está lejos de realizarse la aplicación satisfactoria de ese derecho. Sigue habiendo unos 5 millones de afganos refugiados en el extranjero y no se ha entablado un verdadero diálogo entre las partes en conflicto. El Gobierno ha dirigido llamamientos a los comandantes de la oposición para entablar el diálogo. El Gobierno afirma que más de 889 grupos de oposición armada, en total 81.000 personas, han cesado las hostilidades y que se han firmado protocolos para el cese de las actividades armadas con 479 grupos armados y no armados, con un total de 69.000 hombres 2/. El Relator Especial se entrevistó con varios comandantes, que manifestaron que nunca habían oído hablar de tales protocolos.

El Ministro de Defensa declaró que durante los 20 últimos meses 120.000 hombres armados habían cesado sus actividades y que el 70% de los comandantes habían abandonado la lucha. Sin embargo los líderes de los grupos políticos basados en Peshawar han hecho caso omiso de las llamadas al diálogo del Gobierno pues, por cuestión de principio, rechazan todo contacto con el Gobierno afgano.

102. El Loya Jirgah tradicional podría ser un elemento y un medio para la libre determinación. Pero ese Loya Jirgah es considerado por la oposición como un partido Jirgah, a pesar de que la nueva Constitución contiene disposiciones sobre la elección de los miembros del Loya Jirgah por el pueblo por sufragio universal, igual, libre, secreto y directo (art. 66). Tales elecciones no han tenido lugar.

103. Se ha planteado la cuestión de las elecciones generales en relación con el derecho a la libre determinación. El principio democrático reconocido de las elecciones libres se recoge en el artículo 79 de la nueva Constitución. Sin embargo, ese principio no puede aplicarse en la medida de que los refugiados no pueden participar en las elecciones parlamentarias. Además, las diversidades tribales y las diferentes opiniones de los diversos movimientos políticos con respecto a los posibles procedimientos electorales muestran que las elecciones generales no se podrán celebrar si no se encuentra previamente una solución política al conflicto. Por otra parte, está generalmente admitido que las futuras elecciones habrán de estar precedidas por disposiciones transitorias. A veces se ha mencionado el papel que podría desempeñar el ex Rey Zaher Shah en el proceso de reconciliación.

104. La Asociación de Abogados de la República del Afganistán ha realizado un acto de independencia publicando traducciones de instrumentos básicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirmando su validez. La revista trimestral Law and Life publicó el primer número de una carta asiática de derechos humanos. Según se dijo al Relator Especial no ha habido interferencias del Gobierno en relación con estas iniciativas.

105. El plan de paz del Presidente de la República y del Frente de Salvación Nacional puede considerarse un intento de lograr una solución nacional. En la medida en que hay 140 "gobiernos" en la región, la libre determinación debe considerarse un proceso cuya dinámica debe venir determinada por todas las partes principales en el conflicto. Ese proceso deberá gestarse en el interior del país y podría ser coordinado por las Naciones Unidas.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

106. Después de la retirada de las tropas soviéticas del Afganistán de conformidad con los Acuerdos de Ginebra y con las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos en el país sigue determinada por un conflicto armado entre el Gobierno, por una parte, y las fuerzas de oposición que actúan dentro y fuera del país por otra. No han cesado los suministros de armas. También causan intranquilidad los choques armados que se producen entre diferentes grupos de la oposición e incluso entre tribus.

107. A pesar de las reiteradas tentativas de los representantes de las Naciones Unidas y del Gobierno del Afganistán para buscar una solución política al conflicto, parece que las partes importantes en el conflicto, por diversas razones, tratan de llegar a una solución militar. Los grupos de oposición sólo están unidos en su rechazo al Gobierno actual del Afganistán. Mientras existan opiniones divergentes sobre cuestiones tales como el honor de las familias, los clanes, las tribus y el país será difícil convencer a todas las partes interesadas de la necesidad de entablar un diálogo político sin condiciones. Mientras dure el conflicto estarán en peligro el derecho a la vida y la seguridad de las personas.

108. El Gobierno coopera ahora plenamente con las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, en el empeño de mejorar la situación de la población que sufre las consecuencias económicas, sociales y culturales del conflicto. Esto es un paso importante en el proceso de reconciliación.

109. La situación de los refugiados no ha cambiado apreciablemente. Todavía hay unos cinco millones de afganos en el extranjero. En junio de 1990 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en cooperación con el Gobierno del Pakistán, inició un proyecto experimental sobre repatriación. Este proyecto muestra que ha comenzado el retorno sistemático de los refugiados. El Gobierno del Afganistán ha hecho preparativos técnicos y financieros para recibir a los repatriados. Este proceso tropieza con dificultades materiales y políticas derivadas de la lamentable situación económica en las zonas a las que se regresan los refugiados. Las dificultades políticas se deben a que algunos partidos de oposición piden que los refugiados no regresen mientras esté en el poder el Gobierno actual. Además, no ha mejorado la situación que encontrarán los refugiados a su retorno. Esto significa que no se han aplicado las disposiciones de los Acuerdos de Ginebra relativas al libre regreso de los refugiados. No cabe esperar un regreso masivo antes de la rehabilitación de las zonas de que se trata. Sin embargo, no aumenta el número de refugiados.

110. Mientras los refugiados no puedan regresar sin peligro y libremente a sus hogares no se realizará plenamente el ejercicio del derecho a la libre determinación. Tampoco se puede garantizar el derecho a elecciones libres por sufragio universal mientras no puedan votar todos los ciudadanos del país.

111. Ha comenzado con lentitud el proceso de la limpieza de minas. El Gobierno se ha manifestado totalmente dispuesto a cooperar con las Naciones Unidas a este respecto, pero todavía no se ha materializado esa cooperación.

112. La nueva Constitución aprobada por un Loya Jirgah ha introducido un sistema multipartidista que da al Gobierno una base mucho más amplia. Las dos terceras partes de sus miembros no pertenecen al partido en el poder. Sin embargo, las carteras ministeriales de importancia siguen en manos de miembros del partido y el sistema gubernamental está dominado por el Partido Watan, antes PDPA.

113. Respecto del derecho a la libertad personal, la situación ha mejorado hasta cierto punto, en lo que se refiere a la duración de la detención policial y su control por el poder judicial.

114. En general ha mejorado la situación de los presos condenados, pero el Relator Especial duda de que esta mejora haya beneficiado también a los presos extranjeros. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene acceso a los presos de esta categoría.

115. La situación de los presos no sentenciados, es decir los que están en proceso de interrogatorio o esperando juicio, es un tanto confuso. El Comité Internacional de la Cruz Roja todavía no ha logrado acceso a esta categoría de presos. Dado que son muchos centenares a consecuencia de la intentona de marzo de 1990, el Relator Especial ve con preocupación la suerte de esos presos. Salvo un caso denunciado de tortura y alegaciones de privación del sueño durante el período de interrogatorio, al parecer casi han cesado las denuncias de torturas y otros tipos de malos tratos.

116. Todavía se aplica la pena de muerte. Dado que la nueva Constitución ha introducido la ley cherámica en el sistema jurídico, cabe señalar que, de conformidad con esta ley la persona condenada a muerte puede obtener el perdón si la familia de la víctima da su consentimiento. Ha habido 50 casos de perdón y 10 casos en los que se ha ejecutado la sentencia de muerte. La pena capital sigue ahora un procedimiento más reglamentado y parece ser menos arbitraria.

117. El terrorismo, en particular los constantes ataques con cohetes, ha causado entre la población civil en 1989 y 1990 más de 4.700 muertes, de ellas 2.100 solamente en Kabul. Los bombardeos, los ataques con cohetes y los bombardeos de artillería por parte del Gobierno también ocasionan destrucción y muerte entre la población civil. Sin embargo, con excepción de los hospitales de que se encarga el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha disminuido el número de heridos de guerra en los hospitales del Pakistán y de Kabul.

118. El último Loya Jirgah proclamó un decreto adicional de amnistía general según el cual los presos condenados hasta cinco años de cárcel serán puestos en libertad al cabo de un año; los condenados hasta 10 años serán puestos en libertad después de cumplir la cuarta parte de su condena y los condenados a más de 10 años quedarán en libertad después de cumplir la tercera parte de su condena. Los presos que sufren enfermedades incurables y los mayores de 60 años también serán puestos en libertad. En ciertos casos también se concede el indulto. El Relator Especial desconoce la suerte de los prisioneros que están en manos de las fuerzas de oposición. Se cree que todavía hay algunos muyahidin afganos encarcelados en la Unión Soviética.

119. El disfrute de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el Afganistán depende de la situación militar y política en las diferentes regiones del país. La situación de los derechos humanos en las zonas que no están bajo control del Gobierno no está clara; la situación económica es deplorable y no existe una administración eficaz.

120. El Relator Especial cree que la situación general de los derechos humanos en el Afganistán es compleja y está lejos de corresponder a las normas consagradas en los instrumentos internacionales. Se debe, pues, considerar en el contexto del conflicto actual. Lamentablemente, tanto el conflicto como las personas parecen haberse convertido en una "guerra olvidada" y unas "personas olvidadas".

B. Recomendaciones

121. Las Naciones Unidas deberían hacer todo lo posible para contribuir a una solución política del conflicto, como único medio de garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el país.

122. Debe cesar el empleo de armas contra la población civil. El hecho de emplearlas se debe calificar como terrorismo, según se define en el derecho humanitario.

123. Se deberían llevar adelante todos los proyectos relativos al regreso de los refugiados y todos los gobiernos interesados deberían colaborar en estos proyectos y deberían ser incitados a hacerlo.

124. Deberían continuar los esfuerzos tendientes a ajustar a las normas internacionales el régimen de detención preventiva. Deberían respetarse las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. La abolición de la pena de muerte correspondería a la tendencia de la política de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

125. Los movimientos de oposición deberían abrir incondicionalmente sus cárceles y centros de detención de modo que las organizaciones internacionales humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, pudieran visitar a los presos.

126. El Comité Internacional de la Cruz Roja debería tener acceso a los presos en detención preventiva.

127. Mientras persista el conflicto armado se debería considerar y tratar a los combatientes conforme al derecho humanitario; esta recomendación también es válida para la oposición.

128. Se deberían hacer nuevos esfuerzos para proteger el patrimonio cultural del Afganistán mediante la colaboración del Gobierno con la UNESCO; esta organización debería ocuparse asimismo de la rehabilitación de las universidades.

129. En la limpieza de minas sólo se debería emplear a personas capacitadas. Ese criterio debería ser una condición para la capacitación. Se deberían entregar a la Oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas en relación con el Afganistán los mapas de los campos de minas existentes con fines de consulta y cooperación con la limpieza de minas.

130. Se debería pedir a las Naciones Unidas que estudie todos los elementos de las elecciones generales teniendo en cuenta la historia política del Afganistán y las costumbres y tradiciones de la sociedad afgana, a fin de elaborar modelos para un sistema de elecciones generales en el Afganistán de hoy como medio de llegar a una solución política del conflicto.

131. El Gobierno debería seguir investigando el paradero de los presos y las personas desaparecidas.

132. Mientras persista la situación actual de los derechos humanos en el Afganistán, un Relator Especial debería seguir informando a los órganos competentes de las Naciones Unidas sobre la situación. Una vez que se llegue a una solución política podría cesar la vigilancia de las Naciones Unidas.

Notas

1/ Con referencia a los artículos 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en conjunción con los artículos 41 y 42 de la nueva Constitución.

2/ Véase "Loya Jirgah 1990", pág. 46.

Anexo I

INFORMACION PARA LOS REFUGIADOS AFGANOS EN BELUCHISTAN

(Publicada por el Gobierno del Pakistán conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

Los refugiados del Afganistán han sido bienvenidos en el Pakistán y han recibido asistencia y protección durante más de 10 años. Continuarán siendo bienvenidos hasta que se haya restablecido la paz en su país.

Algunos refugiados del Afganistán ya han comenzado a regresar a sus hogares. Los que deseen regresar voluntariamente al Afganistán pueden hacerlo. Deberían recibir toda la asistencia necesaria.

El Gobierno del Pakistán, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Coordinador de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas en relación con el Afganistán y el del Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos han convenido en proporcionar un paquete de asistencia a los refugiados que regresen voluntariamente a su país. Esto requerirá la devolución de sus cartillas de racionamiento.

En el Afganistán, el sistema de las Naciones Unidas aplica un criterio integrado a la rehabilitación y reconstrucción del país. Siempre que es posible presta asistencia material a las comunidades locales en función de las necesidades que se han determinado. Las personas desplazadas dentro del país tendrán derecho a la misma ayuda humanitaria y económica. Se dará prioridad a las zonas a las que regresan o probablemente regresen los refugiados y las personas desplazadas. Ya se han tomado medidas para establecer una presencia de las Naciones Unidas en varias provincias, en particular aquellas a las que probablemente regresen los refugiados como Herat, Kandahar, Kunar y Paktika.

Se dará a los refugiados que deseen repatriarse voluntariamente un subsidio único de repatriación de 3.300 rupias por familia. Además, recibirán 300 kilogramos de trigo por familia (aproximadamente la ración de tres meses).

Este proyecto se llevará a la práctica inicialmente en cuatro puntos del Beluchistán durante un período de tres meses, a partir de mediados de julio de 1990. La distribución efectiva de asistencia para la repatriación comenzará aproximadamente el 25 de julio de 1990. Después de tres meses se hará una evaluación del proyecto.

Los puntos del Beluchistán en que los refugiados que parten pueden entregar sus cartillas y recibir el paquete de trigo son Pishin, Chaman, Dalbandin y Muslimbagh.

Los refugiados registrados que deseen regresar al Afganistán y recibir el paquete de asistencia deberán presentarse, después de la fecha inicial, en una sucursal bancaria designada al efecto en un punto de salida, con su cartilla de racionamiento provista de etiqueta de revalidación. En ese punto recibirán

asistencia de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de obtener el subsidio de repatriación. De ahí serán dirigidos al punto más próximo de distribución de alimentos del Comisionado para los Refugiados del Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos, donde se les entregarán 300 kilos de trigo antes de partir para el Afganistán.

Los refugiados que regresen tendrán derecho a llevarse al Afganistán todos sus enseres y pertenencias domésticos y el trigo que se les ha entregado. Se han cursado órdenes en este sentido a los funcionarios del Pakistán en los puntos de cruce de la frontera. Se informa a los refugiados de que habrá vigilancia del Gobierno del Pakistán para que puedan recorrer sin peligro las siguientes rutas hacia el Afganistán:

Loralai	-	Muslimbagh	-	Badini
Pishin	-	Barshore		
Quetta	-	Chaman		
Dalbandin	-	Chotto		

Cualquier problema que se presente deberá ser comunicado al Comisionado para los Refugiados del Afganistán o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Beluchistán.

El Gobierno del Pakistán

Anexo II

INFORMACION PUBLICADA POR LOS COMANDANTES DE LOS MUYAHIDIN ISLAMICOS

(Proporcionada al Relator Especial por el Comisionado Regional
para los Refugiados Afganos en Quetta)

Como estaba previsto, el régimen ateo comunista del Afganistán se ha retirado de algunas zonas fronterizas del Afganistán. Por medio de sus agentes entre los refugiados, con sus palabras mendaces, ese régimen de conseguir que los refugiados afganos musulmanes, ya oprimidos, sean enviados al Afganistán mediante engaños para mantenerlos allí, en circunstancias desfavorables, a fin de vengarse en los refugiados de sus dirigentes y de sus pérdidas. Conforme a los citados versículos del Corán y a la palabra del Santo Profeta, nosotros los comandantes advertimos a estos refugiados que hasta que se haya establecido nuestro Gobierno islámico no se permitirá bajo ninguna circunstancia a los refugiados regresar al Afganistán. No deben malograr los sacrificios de tres millones de mártires afganos ni debe permitirse que los 10 largos años de lucha de los muyahidin sean estériles. Toda persona culpable de ese delito será tratada con severidad. Nosotros los comandantes de los campamentos y de la línea del frente respetamos los versículos del Corán y la palabra del Santo Profeta, y a todo aquel que entregue la libreta de pases o la presente a las autoridades afganas le confiscaremos su cartilla de racionamiento, sus pertenencias serán quemadas y se le impondrá una multa de 20.000 rupias pakistaníes.
